

¿Por qué la ciencia política no previó las revueltas en el mundo árabe?

Farid Kahhat

1. La ciencia política y los árabes

En un ensayo publicado en abril de 2010, el novelista egipcio Ala Al Aswany decía lo siguiente sobre su país: «La situación puede explotar con fuerza en cualquier momento»¹. Al igual que los politicólogos, Al Aswany no estaba en condiciones de predecir ni el cuándo ni el cómo de ese eventual estallido. Pero a diferencia de los politicólogos (que suelen centrar su atención en los actores políticos formales y los incentivos que provee el entramado institucional bajo el cual tiene lugar su interacción), Al Aswany creía haber identificado un magma social en ebullición², con consecuencias políticas previsibles: tarde o temprano, aquel habría de producir una erupción volcánica que podría poner fin a un orden autoritario que hasta la víspera parecía esculpido en piedra.

El carácter fortuito de los hechos que operaron como detonante en cada uno de los estallidos ulteriores (V., la inmolación a lo bonzo de un vendedor de frutas en Túnez, el trato vejatorio de las autoridades contra unos escolares por pintar grafitis en Siria, una marcha de los familiares de presos fallecidos durante un motín carcelario en Libia, etcétera), sugieren que Al Aswany tenía razón. Sugiere lo mismo el que se replicara en otros países la experiencia que operó como detonante en Túnez (V., individuos que se prendían fuego en lugares públicos), sin producir resultados similares. Parafraseando la metáfora leninista, en ausencia de un trasfondo social que fungiera de combustible, una chispa no bastaba para incendiar la pradera.

¹ BASTENIER, M. A. «Cuando el árabe ocupa las calles». *El País*, 25 de junio de 2011. http://elpais.com/diario/2011/06/25/babelia/1308960746_850215.html

² Discutiremos esas condiciones sociales en la siguiente sección.

Aunque de modo implícito antes que explícito, y desde el ensayo antes que desde la investigación académica, Al Aswany sugiere una perspectiva de lo político cercana a la que postulaba Samuel Huntington en su crítica a la teoría de la modernización. Así, mientras esa teoría preveía sinergias entre las distintas facetas del proceso de modernización, Huntington observó que niveles ascendentes de desarrollo económico y social tendían a producir golpes de Estado y revoluciones (entre otras formas de inestabilidad política), antes que una transición pausada hacia la democracia representativa. Y su explicación de esa paradoja era la distancia que existe entre las expectativas de una población que alcanza cierto grado de movilización, educación y medios económicos, y un sistema político que no ofrece canales institucionalizados de participación. Si añadimos el denominado *crony capitalism*, esa podría ser una buena descripción de lo que aconteció en Túnez y, en menor medida, en Egipto, países cuyos índices de desarrollo humano se elevaron en un 30 y un 28%, respectivamente, entre 1990 y 2010³. Precisamente por eso Francis Fukuyama reivindica la perspectiva de Huntington por oposición a la evolución posterior de la ciencia política. Según él, «Huntington fue uno de los últimos estudiosos de las ciencias sociales que intentó entender los vínculos entre los cambios políticos, económicos y sociales de forma global»⁴.

Ahora bien, podrían esgrimirse varios argumentos para explicar por qué los politicólogos no pudieron prever los cambios en curso en el mundo árabe. Un primer argumento es que quienes creen que las ciencias sociales deberían ser capaces de predecir y controlar la evolución de su objeto de estudio no entienden las diferencias entre ciencias sociales y ciencias naturales. El positivismo lógico partía de una premisa según la cual el objeto de estudio de ambos tipos de ciencia era en esencia similar al de las ciencias naturales. Las perspectivas no positivistas sostienen que existen diferencias cualitativas entre los objetos de estudio de ambos tipos de ciencia, la más importante de las cuales es el problema de la reflexividad. Es decir, a diferencia de los insectos que estudian los entomólogos, los seres humanos son capaces de comprender las teorías que pretenden explicar su conducta, y de modificar su conducta en respuesta a su comprensión de esas teorías. Un ejemplo de ello es un estudio que muestra cómo las teorías en las que se socializan los estudiantes de economía pueden influir sobre sus conductas, allí donde su único propósito era describirlas:

Frank, Gilovich y Regan (1993) hallaron que los estudiantes de economía eran menos proclives que otros estudiantes a cooperar en el dilema del prisionero. Así mismo, eran más propensos a abstenerse de asumir compromisos para cooperar y eran los más pesimistas acerca de las perspectivas de que otros cooperen. Como resultado, el grupo

³ FUKUYAMA, F. «El orden político en Egipto». *Letras Libres*, XIII, 14-19 (junio 2011), p. 16.

⁴ *Ibíd.*, p. 14.

de economistas obtuvo un nivel significativamente menor de beneficios que el resto. Frank también mostró que esto no es la consecuencia de un proceso de auto-selección (según el cual los menos propensos a cooperar se sentirían más inclinados a estudiar economía), sino más bien de la propia experiencia de estudiar economía. [...] En resumen, el experimento es un testimonio del poder potencial de cualquier teoría para moldear el mundo en que vivimos, a través de su influencia en la manera en que la gente se piensa a sí misma⁵.

Un segundo argumento sería que quienes creen que las ciencias sociales deberían ser capaces de predecir y controlar la evolución de su objeto de estudio tienen además una comprensión equivocada de las ciencias naturales: la astronomía por ejemplo tiene una gran capacidad predictiva, pero no tiene mayor capacidad para influir sobre los cuerpos celestes que constituyen su objeto de estudio. Y la teoría de Darwin explica la evolución de las especies, pero no hace mayores predicciones sobre su derrotero futuro. No en vano quienes creen lo contrario están en buena compañía cuando yerran: la mayoría de los politicólogos no pudo prever los cambios en el mundo árabe, de la misma manera en que la mayoría de los académicos en economía (la ciencia social que más ha avanzado en el propósito de emular a las ciencias naturales), no pudo prever la «gran recesión» de 2008.

A su vez, quienes dentro de la ciencia política creen que las ciencias sociales deberían aspirar a tener una capacidad predictiva, podrían alegar que las explicaciones de las revueltas basadas en variables estructurales casi siempre lo hacen de manera *post hoc*. Suelen por ello padecer de un «sesgo retrospectivo» (*hindsight bias*), lo cual implica que pueden construir explicaciones que parecen calzar los hechos ya conocidos, pero que no tienen mayor capacidad predictiva. Y aunque la predicción de Al Aswany fuera acertada, en ausencia de una explicación rigurosa sobre la razón por la que una determinada secuencia de eventos es considerada necesaria, podría tratarse de una coincidencia tan afortunada como espuria.

Pero el mayor problema no es que los politicólogos no pudieran prever las revueltas en el mundo árabe, o sus consecuencias (V., el derrocamiento de varios regímenes). Es más bien que sus investigaciones indujeron a pensar que la probabilidad de que esas revueltas (y sus consecuencias) tuvieran lugar era absolutamente marginal. De hecho, en ocasiones lo dijeron de manera explícita. Debemos por ejemplo a la hidalguía de F. Gregory Gause III recordarnos la recomendación que hiciera al gobierno de su país durante el otoño de 2005: «Yo argumenté que los Estados Unidos no debían alentar la democracia en el mundo árabe porque los aliados autoritarios de Washington

⁵ SHAUN, P., H. HARGREAVES e Y. VAROUFAKIS. *Game Theory. A Critical Introduction*. Londres y Nueva York: Routledge. 1995, p. 241.

representaban una apuesta estable a futuro»⁶. A su vez el Índice de Estados Fallidos de 2011 auspiciado por la revista *Foreign Policy*⁷, colocaba a Túnez y Libia respectivamente en los puestos 108 y 111, en un *ranking* de 177 países: es decir, dos países árabes en donde el viejo régimen fue derrocado ese mismo año⁸. Si bien es cierto que el Índice de Estados Fallidos no pretende ser un modelo predictivo, sí pretende de manera explícita ser un insumo para la toma de decisiones en Washington, en cuyo caso, basados en él, los tomadores de decisiones jamás habrían reparado en lo que ocurría en esos países.

Hounshell sostiene que los datos agregados (como aquellos que emplea el índice), tampoco permiten prever hechos como un «efecto demostración»⁹. Pero sí, como sugiere esa afirmación, la presencia de un efecto demostración contribuiría a explicar la propagación de las revueltas, entonces la posibilidad de que ese efecto se produzca debiera ser una variable a explorar cuando estudiamos la estabilidad política en el mundo árabe. Es cierto que se trata de una variable cuya presencia sería difícil de identificar o, una vez identificada, de operacionalizar. Pero de existir razones para suponer que tiene alguna capacidad explicativa, el que sea una variable difícil de cuantificar o modelar debería ser una consideración secundaria. Y Gause sugiere que existió un efecto demostración, el cual asocia con un nuevo tipo de panarabismo¹⁰. Como él mismo indica, «Los activistas e intelectuales árabes siguieron con deteni-miento en 2009 las protestas del Movimiento Verde en Irán, pero ningún árabe salió a las calles para emular a sus vecinos iraníes. Sin embargo en 2011, un mes después de que un vendedor de frutas en Túnez se prendiera fuego, el mundo árabe estaba envuelto en revueltas»¹¹. De hecho, ese no es el único ejemplo posible de un efecto demostración que tiene como ámbito exclusivo de incidencia el mundo árabe: pese a ser objeto de una condena mayoritaria en los países árabes, la invasión y ocupación de Afganistán en 2001 no produjo en ellos movilizaciones de protesta significativas. Movilizaciones que sí tuvieron lugar cuando se produjo la invasión y ocupación de un país árabe como Irak en 2003.

Al igual que en el caso de Bolivia a inicios del siglo XXI, la importancia que la literatura académica concede al diseño institucional como explicación de la estabilidad política y la eficacia en la gestión gubernamental podría ser parte del problema.

⁶ GAUSE, F. G. «Why Middle East studies missed the Arab Spring?». *Foreign Affairs*, 90, 4 (2011), 81-90, p. 82.

⁷ Véase: <http://www.fp-cs.org/>

⁸ HOUNSHELL, B. «Dark Crystal. Why didn't anyone predict the Arab revolutions?». *Foreign Policy*, 50, julio/agosto (2011), p. 50.

⁹ Ídem.

¹⁰ GAUSE, F. G. Ob. cit., p. 82.

¹¹ *Ibíd.*, pp. 87-88.

En décadas recientes Bolivia constituye un ejemplo de las posibilidades que ofrece un mejor diseño institucional dentro de un régimen presidencial, pero también de sus limitaciones. Por ejemplo, autores como Josep Colomer sostenían que, gracias a las reformas constitucionales de principios de la década de 1980 (V., segunda vuelta presidencial en el Congreso, proceso de descentralización política, combinación del sistema electoral de representación proporcional con el sistema mayoritario, entre otros), Bolivia había pasado de ser un país con más golpes de Estado que años de independencia, a ser un país con una estabilidad política perdurable¹². Pero cuando el gobierno del presidente Sánchez de Lozada llegó a su abrupto final en medio de masivas movilizaciones de protesta, el propio Colomer sostuvo durante una conferencia brindada en el Centro de Estudios y Docencia Económica de México en noviembre de 2003 que ese desenlace no se debía a fallas en el diseño institucional, sino a la presunta «inviabilidad estructural» del país. Ahora bien, si la «inviabilidad estructural» (como quiera que se defina), es una variable con mayor capacidad explicativa que el propio diseño institucional cuando se trata de entender la estabilidad política en Bolivia, cabría preguntarse por qué no fue incorporada en el análisis. La respuesta parece ser que (como un probable «efecto demostración» en el caso de las revueltas en el mundo árabe), se trata de una variable menos proclive a un trato formal y cuantitativo (y menos «política», *strictu sensu*), que las variables referidas al diseño institucional. Lo cual sugiere un problema de fondo con esa forma de abordar la investigación académica: en lugar de que la pregunta de investigación guíe la selección del método, es el método el que define cuáles son las posibles preguntas de investigación que deberían considerarse relevantes.

2. ¿Qué cambió entre los árabes?

«Los jóvenes activistas en cada país comparten ideas, tácticas, y apoyo moral, pero enfrentan diferentes adversarios y operan en diferentes contextos»¹³.

La cita de Lisa Anderson provee los elementos esenciales para responder a la pregunta. Comenzando por los jóvenes activistas, un reciente artículo de Fareed Zakaria nos brinda un dato interesante: el 80% de los conflictos armados internos ocurridos en el mundo entre 1970 y 2007 tuvieron lugar en países en los que un 60% o más de la población tenía menos de treinta años de edad¹⁴. Es sintomático que el recuento comience en 1970, dado que en la década de 1960 diversos países desarrollados alcanzaban ese umbral sin padecer por ello conflictos armados internos

¹² COLOMER, J. *Strategic Transitions*. Baltimore: John Hopkins University Press, 2000.

¹³ ANDERSON, L. «Demystifying the Arab Spring». *Foreign Affairs*, 90, 3 (2011), 2-7, p. 7.

¹⁴ ZAKARIA, Fareed. «Why it's different this time?». *Time*, febrero 28 de 2011, pp. 22-23.

(la emergencia de grupos armados como el Baader-Mainhof en Alemania o las Brigadas Rojas en Italia es en lo esencial un fenómeno de la década de 1970, y produjo niveles relativamente bajos de violencia política). También es sintomático que el recuento culmine en 2007, pues hoy en día la virtual totalidad de los países árabes merodea el umbral del 60% de población menor de treinta años, pero no en todos aquellos en los que se han producido revueltas estas han derivado en un conflicto armado interno.

Además de la proporción que representan dentro del conjunto de la población, en gran parte de los países árabes teníamos además un número creciente de jóvenes que accedían a la educación formal y, en particular, a la educación superior. La educación a su vez generaba expectativas de movilidad social, las que solían verse frustradas en países como los árabes, en los cuales las tasas de desempleo juvenil superaban habitualmente el 25%. Según la exsecretaria de Estado Condoleezza Rice, las brechas que identificó el Reporte de Desarrollo Humano Árabe en 2002 (V., respeto por la libertad humana, empoderamiento de la mujer y acceso al conocimiento), no solo impedían el progreso de la región, sino que «estas brechas producen un daño aún mayor: son la causa de la desesperanza que a su vez crea un vacío hacia el cual fluyen el extremismo y el odio»¹⁵. Bajo esas condiciones, los descontentos habrían buscado refugio en las únicas esferas de interacción social con cierta autonomía respecto al régimen político (V., el estadio, la mezquita, y el ciberespacio). Así, nuevamente según Rice, «Hay una razón por la que los extremistas son la fuerza política más organizada en el Medio Oriente hoy. Los autoritarismos no permitieron la política en la plaza pública y entonces la “política” se refugió en mezquitas y madrazas radicales»¹⁶. Por último, el descontento no solía encontrar canales institucionales de expresión bajo regímenes autoritarios sustentados en la represión. Y según Rice, «Si la gente no tiene forma de exigir al gobierno que rinda cuentas a través de un cambio pacífico, lo hará de manera violenta»¹⁷.

Aunque el artículo de Rice es de 2011, no es casual que fuera publicado el 11 de septiembre: se trata del mismo argumento que esgrimiera tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, y su propósito entonces no era explicar la posibilidad de revueltas democráticas en el mundo árabe, sino el hecho de que Al Qaeda surgiera precisamente en esa región del mundo. La metáfora implícita tras ese argumento sugería que los países árabes eran como una olla a presión: había un cúmulo de frustraciones en ebullición, las cuales eran reprimidas por los autoritarismos de la región, pero siempre bajo peligro de estallar si no se les brindaba una válvula de escape.

¹⁵ RICE, C. «Why Democracy Prevails?». *New York Times*, 11 de septiembre de 2011. www.nytimes.com

¹⁶ Ídem.

¹⁷ Ídem.

En la visión de Rice (asumida por la administración Bush), esa válvula de escape era un discurso que atribuía todos los problemas a la acción disociadora de agentes externos (V., los Estados Unidos e Israel). A su vez, la conjunción del descontento social, la falta de canales legítimos para expresar ese descontento, y un discurso que atribuía los problemas a terceros (el imperialismo o el sionismo), producía el caldo de cultivo que nutría a organizaciones como Al Qaeda.

El argumento en general parece sostenerse en los hechos, salvo por la presunción de que la válvula de escape provista por un discurso antioccidental inducía a los árabes a culpar a Estados Unidos e Israel (antes que a sus propios gobiernos), por sus condiciones de vida. Cuando Rice elaboró el argumento, por primera vez existía ya abundante evidencia surgida de la región que indicaba lo contrario, y la incapacidad para tomar en consideración esa evidencia parece una instancia de la comprensión orientalista de lo árabe que analizara Edward Said, según la cual las culturas orientales no son capaces de representarse a sí mismas, y deben por ende ser representadas para una audiencia occidental por expertos especializados en su estudio. Por solo citar un ejemplo, encuestas realizadas en 2002 indicaban que más de un 50% de los árabes musulmanes en Medio Oriente tenían una opinión positiva de la concepción estadounidense de la libertad y la democracia, pero menos de un 10% entre ellos tenía una opinión positiva de la política exterior de los Estados Unidos hacia el Medio Oriente¹⁸.

Lo anterior nos brinda un esbozo de la fuente de demanda por reformas políticas en los países de mayoría árabe. Ahora corresponde abordar los cuellos de botella que restringirían la oferta de reformas políticas (es decir, la segunda parte de la cita inicial de Anderson, según la cual las revueltas «enfrentan diferentes adversarios y operan en diferentes contextos»). Según Gause, la mayoría de académicos «atribuyó la estabilidad de las dictaduras árabes a dos factores en común: el complejo militar y de seguridad, y el control estatal sobre la economía», acto seguido señala que en ambos temas la mayoría de sus colegas hicieron supuestos que probaron ser erróneos¹⁹. El primero de esos supuestos erróneos es que no existía una división entre el régimen, de un lado, y los militares y las fuerzas de seguridad, del otro. El segundo es que el control estatal de la economía era una fuente de estabilidad política.

En cuanto al primero de esos supuestos, la policía constituía el primer dique de contención de las protestas sociales. En los países de mayoría árabe a este se sumaban habitualmente los servicios de inteligencia interior, que constituyen para todo efecto

¹⁸ «Muslim Opinion Polls». *The Economist*, 19 al 25 de octubre de 2002, p. 43. En ese artículo, la revista compilaba diferentes encuestas llevadas a cabo por Zogby International, National Society of Public Opinion Studies, Gallup, World Values Survey y NFO Middle East.

¹⁹ GAUSE, F. G. Ob. cit., p. 83.

práctico una policía política al servicio del régimen. Es solo después de que esos diques de contención son rebasados cuando se plantea la posibilidad de emplear a las fuerzas armadas en misiones de represión interna. Pero a diferencia de las fuerzas policiales, que cuentan con una gradación de instrumentos de represión y están preparadas para enfrentar disturbios, las fuerzas armadas solo cuentan con medios letales y están preparadas para enfrentar amenazas militares externas, no movilizaciones de civiles inermes dentro de su propio país.

Precisamente por el elevado grado de violencia que suele implicar, la participación de las fuerzas armadas en misiones de represión interna constituye un punto de no retorno. El punto clave aquí es que enfrentados a movilizaciones masivas de protesta las fuerzas armadas respondieron de diferente manera en distintos países de mayoría árabe. En Túnez y Egipto las fuerzas armadas se negaron a reprimir a los manifestantes, con lo que llegaron a su fin los gobiernos contra los cuales se dirigían las protestas. En Libia y Yemen las fuerzas armadas decidieron reprimir las manifestaciones, pero el alto mando se dividió como consecuencia de ello. Solo en el caso de Siria las fuerzas armadas reprimieron a los manifestantes sin que el alto mando se dividiera en el proceso. ¿De qué dependen esas diferencias?

Dos variables parecen explicar esas diferencias. La primera es el grado de desarrollo institucional de las fuerzas armadas. En el caso de Túnez, Zine El Abidine Ben Alí era ministro del Interior cuando lleva a cabo el golpe de Estado que lo convertiría en presidente de Túnez. Es decir, controlaba la policía, no las fuerzas armadas. Temeroso de su poderío, establece con estas últimas un *modus vivendi*: un cierto respeto a su autonomía institucional, a cambio de que se mantengan pequeñas y alejadas de la política. Por ello, eran unas fuerzas armadas relativamente profesionales, que no tuvieron mayor participación ni en la corrupción ni en la represión del régimen autoritario. Lo cual les permitía desmarcarse del mismo en un escenario posautoritario, siempre y cuando no obedecieran la orden de disparar contra los manifestantes.

El caso de Egipto es algo más complejo, pues si bien los principales mandos se eternizaron en los cargos (por ejemplo, el mariscal Tantawi es comandante en jefe de las fuerzas armadas desde 1991), cuando menos tienen cierta legitimidad social basada en su desempeño en el campo de batalla (durante la guerra de 1973 contra Israel). Al igual que en Túnez, los altos mandos de las fuerzas armadas no eran parientes del presidente.

A diferencia de Túnez, en Egipto los cuatro presidentes que tuvo el país entre 1952 y 2011 (Mohamed Negib, Gamal Abdel Nasser, Anwar Sadat y Hosni Mubarak), fueron militares. Y las fuerzas armadas estuvieron entre los principales beneficiarios del régimen político que prevaleció durante ese periodo (haciéndose, por ejemplo,

con el control de un emporio industrial). Sin embargo no asumieron en forma directa las funciones de gobierno y permanecieron en lo esencial al margen de la represión política.

Lo anterior explicaría por qué, pudiendo tomar distancia del gobierno de Hosni Mubarak (quien pretendía heredar la presidencia a su hijo Gamal, el cual no contaba con experiencia militar), tenían un mayor interés que las fuerzas armadas tunecinas en la forma que pudiera adoptar un orden político posautoritario. Por eso estuvieron dispuestas a derrocar a Mubarak, pero estableciendo en su reemplazo una junta militar como gobierno interino, con lo cual mantenían una influencia crucial sobre la transición hacia un nuevo régimen político.

A diferencia de Túnez y Egipto, los altos mandos de las fuerzas armadas en Libia, Siria y Yemen no deben sus cargos a méritos profesionales sino a lealtades políticas, e incluso personales: no en vano familiares del propio presidente ocupaban cargos prominentes en el alto mando militar. En Libia Mutasim Gadafi era teniente coronel del ejército y Saif Al Islam Gadafi se convirtió durante la guerra civil en jefe de facto de las fuerzas armadas. Ahmed Ali Saleh, hijo del presidente Alí Abdulah Saleh, comandaba la Guardia Republicana, fuerza de élite del ejército yemení. Y en el caso de Siria Maher Al Assad, hermano del presidente sirio, comanda tanto la Guardia Republicana como la Cuarta División Blindada del ejército (es decir, tanto las fuerzas de élite como la unidad militar que concentra una proporción considerable del armamento pesado).

Pero el tener a parientes del presidente en puestos de mando de las fuerzas armadas no impidió que tanto en Libia como en Yemen militares de alto rango desertaran durante las revueltas. De hecho, en el caso de Yemen el principal desertor fue un pariente del presidente, el general Ali Mohsen al-Ahmar. En Siria en cambio tuvieron que pasar once meses y morir más de 6000 personas antes de que desertara el primer general, Mustafá Al Shejj.

Cabe preguntar entonces qué explica la lealtad virtualmente incondicional de los militares de alto rango en Siria. Aquí entra en juego una segunda variable: la mayor parte del alto mando militar (y también de la élite política), proviene de una minoría étnica, los alawitas. Se trata de una escisión del islam chiíta a la que pertenece un 10% de la población. Es decir, en el mejor de los casos perderían su posición de privilegio bajo un nuevo régimen, y en el peor, podrían perder la vida en forma violenta como consecuencia de acciones de represalia. Por eso es difícil separar la suerte que pudieran correr los generales alawitas de la suerte que el futuro le depara al régimen, y este solo puede confiar en los generales alawitas para reprimir a mansalva todo vestigio de rebelión. No en vano las fuerzas armadas han sido parte consustancial

del régimen político sirio desde 1970, y asumieron sin ambages labores represivas para garantizar su preservación (por ejemplo, para sofocar el levantamiento en la ciudad de Hama en 1982, donde dieron muerte a cuando menos 10 000 personas).

En cuanto al control estatal de la economía (la segunda variable que, a juicio de la mayoría de académicos, explicaba la estabilidad de las dictaduras árabes), un supuesto fundamental se mantiene vigente: las dictaduras árabes con grandes reservas de petróleo y gas capearon con mayor suerte el temporal. Existen cuatro mecanismos que, según la literatura académica, podrían explicar la relación entre industrias extractivas y autoritarismo político. El primero es que las rentas generadas por las industrias extractivas permiten incrementar la capacidad represiva del Estado²⁰. El segundo es que esas rentas pueden dotar al Estado de recursos para formar redes clientelares que le provean una base social. Sin embargo ese argumento también sería válido bajo un régimen democrático.

Bahréin en 2011 provee un ejemplo de la aplicación sucesiva de ambos mecanismos en una economía dotada de rentas producto de la exportación de petróleo: temiendo el contagio de las protestas que se suscitaban en el mundo árabe, la monarquía decide «obsequiar» a cada familia del reino el equivalente a unos 2700 dólares como medida preventiva. Cuando esa medida no consigue impedir las protestas, la monarquía apela a la represión, utilizando para ese fin medios de un alto costo y sofisticación tecnológica, concebidos para una guerra convencional (V., tanques adquiridos de los Estados Unidos). Cuando la represión tampoco consiguió impedir las protestas, el régimen encaró la disyuntiva de escalar el nivel de la represión o iniciar negociaciones con la oposición, y se decantó en lo esencial por la primera opción (a través de la intervención de tropas del Consejo de Cooperación del Golfo).

El tercer mecanismo que explicaría la relación entre industrias extractivas y autoritarismo político supone que las rentas que aquellas generan le permiten al Estado tener una fuente de ingresos que no depende de la existencia de una amplia base tributaria. Al no depender los ingresos fiscales de los tributos que paga la mayoría de los ciudadanos, estos tienen una menor capacidad para exigir al Estado una rendición de cuentas sobre la gestión de los recursos públicos (algo que, en principio, es una característica propia de los regímenes democráticos).

²⁰ En su reporte de 2010 sobre el estado de la democracia en el mundo, la unidad de inteligencia de la revista *The Economist* comienza afirmando que «La democracia está ahora en repliegue. El patrón dominante en todas las regiones en los dos últimos años ha sido el retroceso respecto al progreso previo en materia de democratización». Una de las razones que explicarían esa tendencia es que «Los autócratas han aprendido a protegerse mejor; muchos de ellos presiden Estados con grandes reservas de energía, y se han fortalecido por el incremento sostenido en los precios del petróleo». Democracy in retreat: A report from the Economist Intelligence Unit, pp. 1 y 2. http://graphics.eiu.com/PDF/Democracy_Index_2010_web.pdf

Ese mecanismo se basa en la presunción de que las rentas generadas por las industrias extractivas impiden el surgimiento de lo que algunos autores denominan un «contrato fiscal», que habría propiciado la liberalización de los sistemas políticos en Europa occidental. La idea básica es que los avances en las tecnologías bélicas hicieron que las guerras interestatales tuvieran un costo creciente. Dado que la mayor parte de la riqueza era generada por empresas de propiedad privada, acceder a los recursos necesarios para financiar esas guerras requería de una mayor presión tributaria sobre esas empresas. Ello dotaba a estas últimas del poder de negociación necesario para exigir a cambio la garantía de ciertos derechos, comenzando por el derecho a la propiedad y al cumplimiento de los contratos. Es decir, los gobernantes aceptan establecer restricciones institucionales a su ejercicio del poder político, a cambio del acceso a nuevos recursos²¹.

En Estados que poseen abundantes rentas producto de las industrias extractivas, los gobernantes podrían en principio obtener todos los recursos que requieran de los impuestos que pagan las empresas del sector, o de la explotación directa de los recursos extractivos (reduciendo la necesidad de obtener tributos del resto de la sociedad). Ello hace que no requieran negociar con los gobernados la concesión de derechos a cambio de la obtención de recursos²².

El cuarto mecanismo que contribuye a explicar la relación entre industrias extractivas y autoritarismo político se basa en el hecho de que esas industrias suelen generar economías de enclave, sin mayores eslabonamientos con el resto de la economía. Lo cual explica que no tiendan a producir el tipo de modernización social que propicia la democracia (por ejemplo, una diversificación ocupacional, con una clase media profesional relativamente grande como proporción de la población).

En general, la dependencia de industrias extractivas haría menos probable el surgimiento de grupos sociales que pudieran eventualmente demandar derechos civiles y políticos (V., trabajadores fabriles, clases medias profesionales, empresarios industriales), porque el Estado tendría menos incentivos para promover el desarrollo de industrias y servicios urbanos (que generan una demanda por mano de obra calificada), como fuente potencial de ingresos tributarios²³. Por ejemplo, una veta de la literatura sobre los orígenes sociales de la democracia concede gran importancia

²¹ MAHON, J. *The Fiscal Contract, International Capital Flows, and the Quest for the Liberal State*. Documento de Trabajo. México D.F.: CIDE, 2003.

²² LEVI, M. *Of Rule and Revenue*. Berkeley/London: University of California Press, 1988.

²³ ISHAM, J., M. WOOLCOCK, M., L. PRITCHETT y G. BUSBY. *The Varieties of Rentier Experience: How Natural Resource Export Structures Affect the Political Economy of Economic Growth*, 2002. <http://info.worldbank.org/etools/docs/voddocs/171/352/rentier.pdf>.

a una eventual alianza entre clases medias profesionales y trabajadores sindicalizados como fuerza motriz del proceso de democratización²⁴.

Pero incluso allí donde una economía basada en industrias extractivas genera el tipo de grupos sociales antes mencionados, estos pueden ver restringida su capacidad de plantear demandas políticas por dos razones: la primera es que podrían carecer de una fuente independiente de ingresos, y depender del Estado como principal fuente de empleo (por ejemplo, en 1975 el Estado kuwaití empleaba al 75% de la población económicamente activa). La segunda es que, en casos como el del golfo Pérsico, la mano de obra (calificada o no), proviene en una alta proporción de inmigrantes que carecen de ciudadanía y, por ende, de los derechos civiles y políticos asociados a ella (en Bahreín, por ejemplo, el 54% de la población está compuesta por extranjeros residentes).

Pero así como el supuesto sobre los efectos de la abundancia de recursos extractivos sobre las perspectivas de estabilidad autoritaria se mantiene vigente, pierde peso relativo el supuesto según el cual la liberalización de la economía en países como Egipto y Túnez habría de favorecer también esas perspectivas de estabilidad autoritaria. Haría eso por dos vías: de un lado, el incremento de agentes económicos privados (que respaldarían al gobierno porque se benefician de esa liberalización), y, de otro, el crecimiento de la economía (que crea empleos mientras provee al gobierno recursos adicionales para lidiar con demandas sociales). Algunas experiencias históricas (V., China o Vietnam), sugieren que el supuesto en cuestión puede ser válido bajo algunas circunstancias. Lo cual indica que deberíamos identificar las circunstancias que explicarían por qué no fue válido en países como Egipto y Túnez.

En Túnez y Egipto la liberalización de la economía no fue tanto una decisión autónoma (como en los casos de China o Vietnam), sino que fue promovida por Estados y organismos multilaterales. Cabría sino recordar que tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial emitían hasta 2010 reportes encomiosos tanto sobre las políticas como sobre el desempeño económico de Egipto y Túnez. ¿Por qué eso podría hacer alguna diferencia? Mencionaremos a modo de ejemplo dos respuestas posibles. En primer lugar porque las políticas de liberalización económica solían incluir políticas de estabilización fiscal, las cuales comprendían medidas tales como la reducción del subsidio estatal a bienes de consumo masivo. Ello en países particularmente vulnerables a los *shocks* externos que padecieron tanto en 2008 como en 2010: el alza de los precios internacionales de los alimentos. Tres de los cuatro países

²⁴ RUESCHEMEYER, D., E. STEPHENS y J. STEPHENS. *Capitalist Development and Democracy*. Chicago: University of Chicago Press, 1992.

árabes que han visto caer a sus gobiernos desde el inicio de las revueltas (Egipto, Libia y Túnez), están ubicados en el mayor desierto del mundo (el Sahara). En parte por esa razón, países como Egipto importan más de la mitad de los alimentos que consumen. Cuando se recuerda además que el ciudadano promedio en Egipto destina alrededor de un 44% de sus ingresos a la compra de alimentos, y que la cotización internacional de alimentos como el trigo creció en un 60% durante el año previo a las revueltas de 2011, resulta plausible suponer que ese es uno de los posibles vínculos entre política económica e inestabilidad política (como también parece haber sido el caso en países del África subsahariana).

El otro ejemplo es el de la privatización de empresas públicas como uno de los componentes de las políticas de liberalización económica. En ausencia de reformas políticas e institucionales que hicieran algo más transparente la gestión pública y establecieran los rudimentos de un proceso de rendición de cuentas, la privatización de las empresas públicas dio rienda suelta a conductas predatorias por parte de los gobernantes y su entorno. Es decir, la privatización de empresas públicas se convirtió en un proceso de expoliación de los bienes del Estado.